



Uno de los tendidos eléctricos que atraviesan la Comunidad de Madrid. Reuters

PP y Vox suman fuerzas contra el plan energético que frena la región

Los partidos pactan un texto para exigir la reforma de la planificación eléctrica y corregir sus «limitaciones» en la Comunidad

Mariano Calleja
Madrid

El acceso a la energía eléctrica es uno de los pilares fundamentales en los que se apoyará el crecimiento de la Comunidad de Madrid en los próximos años y décadas. De ello depende, por ejemplo, la construcción inmediata de 116.000 viviendas y el desarrollo de la inteligencia artificial. En el Gobierno regional de Ayuso están encendidas las luces de alarma por las «limitaciones» que, a su juicio, tiene la planificación eléctrica con horizonte 2026-2030 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyo objetivo debería ser garantizar que la red de transporte de energía eléctrica pueda atender la demanda actual y futura. El Ejecutivo autonómico y el PP de Madrid mantienen la presión sobre el Gobierno de Sánchez para que reforme el modelo de forma urgente y solucione sus «evidentes limitaciones».

Se trata de uno de los principales problemas que la Comunidad de Madrid tiene ahora mismo sobre la mesa, ante la «deficiente planificación» del Ejecutivo nacional. En este caso, el PP de Madrid cuenta con un aliado político, como se comprobó en el último Pleno de la Asamblea. Los populares y Vox pactaron una enmienda transaccional para exigir al Gobierno de España que «reforme el actual modelo de planificación de la red de transporte eléctrico» y corrija todas las deficiencias que han detectado y que frenarían el avance de la Comunidad en diversos frentes.

El acuerdo entre el PP y Vox es extraordinario en la Asamblea de Madrid, algo que no se ve todos los días ni mucho menos, y se produce en un momento de enfrentamiento creciente, cuando el partido de Abascal se ha situado en la oposición dura frente a Isabel Díaz Ayuso, como ya anunció su portavoz parlamentaria, Isabel Pérez Moñino. Por eso es especialmente significativo que ambos grupos fueran capaces de acordar un texto conjunto.

En el texto pactado se insta al Gobierno a solucionar las «limitaciones» de su plan, como «la rigidez en ciclos de seis años y la falta de adaptación al crecimiento económico, industrial y demográfico». También se pide al Gobier-

no que garantice la seguridad del suministro, eleve el límite actual de inversiones en las redes de transporte y de distribución y que la nueva Planificación de la Red Eléctrica 2026-2030 tenga en cuenta todas las necesidades de los proyectos industriales, tecnológicos y digitales de la región.

Como punto clave, PP y Vox reclaman al Gobierno que impulse la continuidad de la energía nuclear en España y requiera al Consejo de Seguridad Nuclear un pronunciamiento urgente sobre la central de Almaraz, «rechazando el actual calendario de cierre». Además, piden una «estrategia nacional que garantice la independencia energética de España».

El acuerdo de la Asamblea es un paso más en la presión que está ejerciendo la Comunidad de Madrid al Gobierno de Sánchez para que garantice un suministro eléctrico suficiente en la región en los próximos años. En diciembre, el Ejecutivo de Ayuso presentó sus alegaciones al Plan Energético y solicitó una revisión profunda para permitir la construcción de vivienda, especialmente de las 116.804 previstas en la corona metropolitana del sureste, de las que aproximadamente la mitad tendría algún tipo de protección. Para ese fin, así como para la puesta en marcha de

otras actividades económicas e industriales, se ha destinado una superficie de más de 40 millones de metros cuadrados en las áreas de El Cañaveral, Berrocales, Ahijones, Valdecarros y Los Cerros, de la capital.

La Comunidad también advirtió de que otros desarrollos urbanísticos en marcha están bloqueados porque «actualmente carecen de acceso al suministro». Esto ocurre en los términos municipales de Alcalá de Henares, Brunete, Fuente el Sanz de Jarama, El Molar, Paracuellos del Jarama, Camarma de Esteruelas, Sevilla y la zona de Madrid Nuevo Norte en Madrid capital.

Centros de datos en peligro

El Gobierno regional madrileño avisó al Ministerio de que es necesario garantizar suministro para crear nuevas infraestructuras de transporte colectivo y movilidad eléctrica, y para generar y consolidar la industria regional. Y algo que preocupa de manera especial en la Comunidad: los centro de datos: «Excluidos del plan, son claves para que funcione el sistema digital y para posicionar al país como destino preferente de la inversión europea en este ámbito».

El pasado 18 de febrero, el Gobierno de Ayuso volvió a la carga con este asunto estratégico. La Comunidad de Madrid reclamó al Ministerio la necesidad de una planificación eléctrica «rigurosa que permita garantizar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales e industriales, así como la seguridad del suministro energético». Según el Ejecutivo regional, la propuesta del Ministerio «compromete iniciativas estratégicas vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial, afectando a proyectos clave para el desarrollo económico y el avance tecnológico de la región».

La Comunidad de Madrid lleva meses advirtiendo de la «insuficiente inversión» en redes eléctricas, puntos de conexión y capacidad para gestionar los picos de generación renovable, una situación que, a su juicio, pone en riesgo la continuidad del suministro. En este sentido, desde el Gobierno regional se recuerda que el pasado 28 de abril se produjo un apagón y que, en las primeras semanas de 2026, se registraron dos activaciones del Sistema de Respuesta Activa de la Demanda, mecanismo que permite la suspensión del suministro eléctrico durante un máximo de tres horas diarias.

El consejero de Medio Ambiente e Interior, Carlos Novillo, envió una carta en febrero a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para subrayar la necesidad de impulsar la continuidad de la energía nuclear en España y para solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear un pronunciamiento urgente sobre la situación de Almaraz. La Comunidad subraya que el cierre de las centrales nucleares provocaría un incremento del coste de la electricidad en torno al 23 por ciento para los hogares, del 35 por ciento para la industria y del 20 por ciento para el sector servicios.

El acuerdo entre ambos partidos se produce en un momento de enfrentamiento creciente entre las formaciones

Como punto clave, reclaman al Gobierno de Sánchez que impulse la continuidad de la energía nuclear en España